



Rama Judicial del Poder Público  
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico  
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

INFORME SECRETARIAL

Barranquilla, 25/08/2.020.

Radicado	08001-33-33-014-2020-00140-00
Medio de control o Acción	Tutela
Demandante	Liliana María Sosa Bolaño, como representante de Bryan Antonio García Sosa
Demandado	Director Caja de Sueldo de Retiro de la Policía Nacional - CASUR.
Juez (a)	Guillermo Osorio Afanador

INFORME
Señor juez, paso el expediente de la referencia, contentivo de una acción de tutela, informando que el mismo fue asignado a este Despacho por reparto. Contiene solicitud de Medida provisional. Demanda remitida en formato PDF.

PASA AL DESPACHO
Para analizar admisión de demanda de tutela con medida cautelar

CONSTANCIA
Acta individual de reparto del 24/08/2.020

ALBERTO LUIS OYAGA LARIOS  
SECRETARIO

Ultimo Folio Digitalizado y número de cuaderno	Firma de Revisado



**Rama Judicial del Poder Público**  
**Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico**  
**JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

Barranquilla, veinticuatro (24) de agosto de dos mil veinte (2.020).

<b>Radicado</b>	<b>08001-33-33-014-2020-00140-00</b>
<b>Medio de control o Acción</b>	<b>Tutela</b>
<b>Demandante</b>	<b>Liliana María Sosa Bolaño, como representante de Bryan Antonio García Sosa.</b>
<b>Demandado</b>	<b>Director Caja de Sueldo de Retiro de la Policía Nacional - CASUR.</b>
<b>Juez (a)</b>	<b>Guillermo Osorio Afanador</b>

**CONSIDERACIONES**

La señora **Liliana Maria Sosa Bolaño**, quien actúa en su condición de madre de **Bryan Antonio García Sosa**, presenta demanda en ejercicio de la Acción de tutela contra la **Director Caja de Sueldo de Retiro de la Policía Nacional - CASUR**, solicitando el amparo a los derechos fundamentales a la vida, la igualdad, al mínimo vital, vida en condiciones dignas de su hijo **Bryan Antonio García Sosa**, persona en condición de discapacidad.

Previo a decidir lo que corresponda sobre la admisión de la acción de tutela, advierte el Despacho que en el presente caso se solicita una medida provisional con el fin de proteger los derechos fundamentales de la accionante, de conformidad con los artículos 7 del Decreto 2591 de 1991 y 230 de la Ley 1437 de 2011.

Ahora bien, respecto a la medida provisional solicitada por el accionante, el despacho considera que la acción de tutela, prevista por el artículo 86 de la Constitución Política, faculta a toda persona para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares, en los casos en que así se autoriza.

El Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, establece que el juez constitucional cuando lo considere necesario y urgente para proteger el derecho “suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere” y dicha suspensión puede ser ordenada de oficio o a petición de parte. En efecto, el artículo 7, dispone:

*“Artículo 7o. Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere. Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante. La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible. El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso”*



**Rama Judicial del Poder Público**  
**Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico**  
**JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que las medidas provisionales pueden ser adoptadas en los siguientes casos: *“(i) cuando resultan necesarias para evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se convierta en una violación o; (ii) cuando habiéndose constatado la existencia de una violación, estas sean necesarias para precaver que la violación se torne más gravosa”* 1. (Autos A-040A de 2001 (MP: Eduardo Montealegre Lynett), A-049 de 1995 (MP: Carlos Gaviria Díaz), A-041A de 1995 (MP: Alejandro Martínez Caballero) y A-031 de 1995 (MP: Carlos Gaviria Díaz).

Dice además la Corte que las medidas cautelares pueden ser adoptadas durante el trámite del proceso o en la sentencia, pues *“únicamente durante el trámite o al momento de dictar la sentencia, se puede apreciar la urgencia y necesidad de la medida”*. (Auto 035 de 2007.)

En cuanto a la procedencia de la medida de suspensión provisional la Corte Constitucional ha expresado:

*“La medida de suspensión provisional de actos concretos debe ser razonada y no arbitraria, producto de una valoración sensata y proporcional a la presunta violación o amenaza de los derechos fundamentales alegados. Así entonces, el Decreto 2591 de 1991, efectivamente permite suspender provisionalmente la aplicación de actos concretos que amenacen o vulneren un derecho fundamental, pero solamente cuando sea necesario y urgente para la protección del derecho, lo cual exige, por parte del juez de tutela, un estudio razonado y conveniente de los hechos que lleven a la aplicación de la medida”*<sup>[4]</sup>.<sup>1</sup>

De igual forma, para proceder a decretar una medida, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que toda medida provisional debe cumplir con dos principios *fumus boni iuris*, y el *periculum in mora*, como lo estableció en la sentencia SU-913 del 2.009, diciendo:

*“(…) En tanto se analizaron dos de los más importantes principios que rigen la práctica de medidas cautelares, para efecto de garantizar un justo término de equidad en el proceso. Estos son: el periculum in mora y el fumus boni iuris, los cuales deben aparecer de forma concurrente para asegurar la proporcionalidad y congruencia de la medida. El primero, periculum in mora, tiene que ver con el riesgo de que al no adoptarse la medida cautelar sobrevenga un perjuicio o daño mayor del que se expone en la demanda, que de no precaverse, transforme en tardío el fallo definitivo. Tiene igualmente que ver con un temor fundado de que el derecho se frustre o sufra menoscabo durante la sustanciación del proceso. El segundo, fumus boni iuris, aduce a un principio de veracidad en cuanto a la afectación del derecho invocado como fundamento de la pretensión principal. Estos dos principios, asegura la doctrina, deben operar de manera concurrente, al punto que la falta de uno de estos elementos, debe dar lugar a que: i. se rechace la medida cautelar o ii. Se otorgue la medida pero de manera limitada. Por ejemplo, si el valor de la causa en juicio ejecutivo es proporcionalmente mínimo a la solvencia del demandado, la medida carecerá de periculum in mora, caso en el cual no habrá necesidad de hacer juicio alguno sobre el principio fumus boni iuris, pues de plano resulta innecesaria la medida”*

---

<sup>1</sup> T-733 de 2013

**Rama Judicial del Poder Público**  
**Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico**  
**JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

Más recientemente, la Sala Plena de la Corte Constitucional, reorganizó estos requisitos en solo tres<sup>2</sup>. Aunque simplifica el análisis, también lo hace más estricto para el juez de tutela que pretenda aplicar el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991. De acuerdo con esta reformulación, la procedencia de la adopción de medidas provisionales está supeditada al cumplimiento de las siguientes exigencias:

*“ (i) Que la medida provisional, para proteger un derecho fundamental o evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público, tenga vocación aparente de viabilidad por estar respaldada en fundamentos fácticos y jurídicos razonables, es decir, que tenga la apariencia de un buen derecho (fumus boni iuris);*

*(ii) Que exista un riesgo probable de que la protección del derecho invocado o la salvaguarda del interés público pueda verse afectado considerablemente por el tiempo transcurrido durante el trámite de revisión, esto es, que haya un peligro en la demora (periculum in mora);*  
*y*

*(iii) Que la medida provisional no genere un daño desproporcionado a quien afecta directamente.”*

Teniendo en cuenta lo anterior, la accionante en este caso, solicitó como medida provisional que:

*“(…) Se ordene, DE MANERA PROVISIONAL y prioritaria, y sin impedimento alguno al Director de la Caja de Sueldo de Retiros de la Policía Nacional (CASUR), se le siga reconociendo el porcentaje de la pensión que recibía el joven BRYAN ANTONIO GARCIA SOSA, como beneficiario sustituto por ser hijo del finado, debido a la discapacidad que padece y la condición de estudiante que tiene el joven en estos momentos, hasta que se le realice la Junta médico que determine su discapacidad.(…)”*

En consonancia, esta agencia, encuentra preciso señalar al respecto que la Corte Constitucional se ha referido a la configuración del perjuicio irremediable recientemente en sentencia T-020 de 2.018, con ponencia del Dr. José Fernando Reyes Cuartas, lo siguiente: *“De la configuración del perjuicio irremediable, se adujo que precisa verificarse: “(i) una afectación inminente del derecho -elemento temporal respecto al daño-; (ii) la urgencia de las medidas para remediar o prevenir la afectación; (iii) la gravedad del perjuicio -grado o impacto de la afectación del derecho-; y (iv) el carácter impostergable de las medidas para la efectiva protección de los derechos en riesgo[58].” Adicionalmente, se aclaró que: “...cuando la acción de tutela es promovida por personas que requieren especial protección constitucional, como (...) personas en condición de discapacidad, (...) entre otros, el examen de procedibilidad de la acción de tutela es menos estricto, a través de criterios de análisis más amplios, pero no menos riguroso”*

Dado lo anterior, y atendiendo la petición de medida provisional solicitada por el accionante, se acredita que se reconoció una cuota de asignación mensual de retiro al joven Bryan Antonio Garcia Sosa, a través de la Resolución No. 19147 de 13/11/2.012, no obstante, afirma la accionante que esta fue recibida hasta el mes de junio de 2.019.

Ahora, de tales elementos probatorios no se permite establecer con certeza los hechos expuestos por la accionante, y mucho menos podría hasta el momento catalogarse una evidente amenaza y/o posible vulneración de los derechos fundamentales alegados, visto

---

<sup>2</sup> Auto 312 del 2018 M.P. Luis Guillermo Guerrero



**Rama Judicial del Poder Público**  
**Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico**  
**JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

que de los hechos plasmados en su libelo tutelar se involucra la suspensión de un acto administrativo, como fue el que reconoció la cuota de asignación mensual de retiro, y del cual no se cuentan con las pruebas suficientes, hasta éste momento, que cuestionen su presunción de legalidad o que a su vez, de sus efectos se derive una clara transgresión a los derechos fundamentales alegados.

En concordancia a lo anterior, esta agencia judicial se abstendrá de conceder la medida solicitada, al no contar con los elementos fácticos suficientes que permitan establecer en esta etapa de la acción constitucional, que la suspensión de la mesada pensional desde hace un año, le ocasione un perjuicio irremediable o amenaza derechos fundamentales al joven Bryan Antonio García Sosa.

De otra parte, se advierte del texto de la demanda de tutela y de los documentos anexos, que debe vincularse al presente trámite a los señores **CLAUDIA MILENA DURANGO PÉREZ, ERICK DUWAN GARCIA CASTRO, SARAY GARCIA DURANDO, JESUS DAVID GARCIA ANGULO, JUDITH STHEFANY GARCIA MARCHENA**, por tener interés en las resultados del presente trámite.

Al no contar el Despacho con información referente al correo electrónico o dirección física donde notificar a las mencionadas personas, se requerirá a la accionante y a la **Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR)**, para que en término de un (1) día siguiente a la notificación del presente auto, proporcionen dicha información de éstas personas.

Así mismo, se vinculará con igual propósito a la **Dirección de Sanidad de la Policía Nacional**, ante posibles ordenaciones dentro del presente trámite de tutela.

Por último, es de señalar que en el correo institucional remitido por oficina judicial fueron allegados unos documentos anexos, entre estos uno denominado “60.pdf” que refieren a la ciudadana Dilia del Socorro Ramos Fernandez y otros, que aparentemente no guardan relación con los hechos expuestos en el escrito de tutela de la señora Liliana Maria Sosa Bolaño, por lo que no se tendrán en cuenta, salvo que la accionante advierta lo contrario.

Ahora bien, decidido lo anterior, se advierte a las partes que el trámite de la presente acción de tutela se adelantará a través de los medios electrónicos y las decisiones se notificarán a las cuentas de correo electrónico que las partes informen a la Secretaría del Despacho.

Los informes, memoriales y recursos a los que tengan derecho las partes se presentarán a través del correo electrónico institucional del Despacho [adm14bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:adm14bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co)

Las decisiones que se adopten durante el trámite tutelar se registrarán en el software de gestión judicial “Siglo XXI”, que podrá ser consultado en la página web de la Rama Judicial en el link <https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/procesos/bienvenida>

Por último y al reunir los requisitos exigidos por el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991 y de conformidad con lo establecido en el núm. 2º del artículo 1º del decreto 1382 de 2000 y decreto 1983 de 2017, se,



**Rama Judicial del Poder Público**  
**Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico**  
**JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

**RESUELVE:**

**1. ABSTENERSE** de decretar la medida provisional solicitada por el accionante de conformidad a lo expuesto en la presente providencia.

**2. ADMÍTASE** la demanda de tutela interpuesta por la señora **Liliana Maria Sosa Bolaño**, quien actúa en representación de su hijo Bryan Antonio Garcia Sosa, contra la **Dirección de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR)**

**3. VINCULESE** al presente trámite a los señores **CLAUDIA MILENA DURANGO PÉREZ, ERICK DUWAN GARCIA CASTRO, SARAY GARCIA DURANDO, JESUS DAVID GARCIA ANGULO, JUDITH STHEFANY GARCIA MARCHENA**, y a la **Dirección de Sanidad de la Policía Nacional**, de acuerdo a lo expuesto en la presente providencia.

**4. NOTIFÍQUESE** personalmente el contenido de este auto al Director de la **Caja de Sueldo de Retiro de la Policía Nacional (CASUR)**, a la **Dirección de Sanidad de la Policía Nacional** y/o quienes hagan sus veces, como también a **CLAUDIA MILENA DURANGO PÉREZ, ERICK DUWAN GARCIA CASTRO, SARAY GARCIA DURANDO, JESUS DAVID GARCIA ANGULO, JUDITH STHEFANY GARCIA MARCHENA** por el medio más expedito y eficaz.

Por Secretaría requiérase a la accionante y a la **Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR)**, para que en término de un (1) día siguiente a la notificación del presente auto, proporcionen información referente al correo electrónico o dirección física donde notificar a las personas naturales antes mencionadas.

**5.- COMUNÍQUESE** el contenido de este auto al accionante, por el medio más expedito y eficaz.

**6. INFÓRMESE** a la entidad demandada y a las vinculadas, que en el término de dos (2) días y por el medio más expedito pueden rendir informe sobre los hechos objeto de la presente acción, advirtiéndole que la información suministrada se considerará rendida bajo la gravedad del juramento y que la inobservancia a contestar acarrea las sanciones consagradas en los Arts. 19, 20 y 52 del Decreto 2591 de 1991.

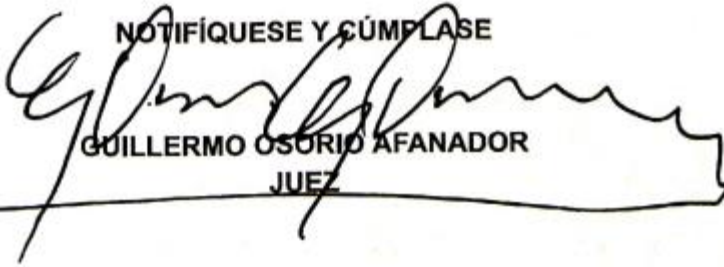
**7.- TÉNGANSE** como pruebas, en lo que fuere conducente, los documentos aportados por la parte demandante en su escrito tutelar.

Requiérase a la demandante para que aclare si los documentos contenidos en el archivo denominado "60.pdf", tienen relación o no con su demanda de tutela, y en caso afirmativo, explique dicha relación.

**8.- REITERAR** que las comunicaciones, memoriales, informes y recursos con ocasión de éste trámite, se recibirán en la cuenta de correo electrónico : [adm14bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:adm14bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co).



**Rama Judicial del Poder Público**  
**Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico**  
**JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**  
  
**GUILLERMO OSORIO AFANADOR**  
**JUEZ**

**NOTIFICACION POR ESTADO**  
**LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO**  
**ELECTRONICO**  
**N° 091 DE HOY 26/08/2020 A LAS 8:00 A.M.**



**ALBERTO LUIS OYAGA LARIOS**  
**SECRETARIO**  
**SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LE DIO CUMPLIMIENTO AL**  
**ARTICULO 201 DEL CPACA**